

C.A. de Copiapó.

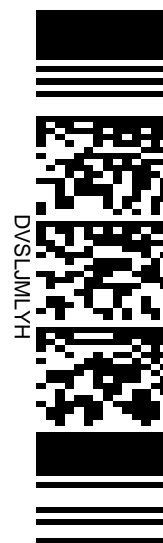
Copiapó, veintidós de diciembre de dos mil veintiuno.

VISTOS:

En causa R.I.T. O-31-2019, R.U.C. N°19-4-0234775-1 del Juzgado de Letras de Diego de Almagro, el abogado don Oscar Gonzalo Guajardo Cabello, en representación de Corporación Nacional del Cobre de Chile Codelco- Chile División Salvador, por la parte demandada, deduce recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva dictada el veinticuatro de septiembre de 2021, por el Juez Titular del Juzgado de Letras de Diego de Almagro, don Rodrigo Matus de La Fuente, que en lo sustancial, condenó a la demandada por haber infringido el deber de seguridad al pago de las siguientes indemnizaciones en relación a los trabajadores que se individualizan: a) Mario Reinoso Cotaipi: \$34.200.000.- por concepto de daño moral; y \$92.592.456.- por concepto de lucro cesante; b) Juan Galleguillos Pangué: \$78.478.298.- por concepto de daño moral; y \$164.228.941.-, por concepto de lucro cesante; c) Miguel Rivera Rivera: \$31.554.097.- por concepto de daño moral; y \$54.384.696.-, por concepto de lucro cesante; d) Oscar Orlando Godoy: \$23.100.000.- por concepto de daño moral y; e) Carlos Urbina Canales: \$22.164.764.- por concepto de daño moral, con reajustes e intereses y costas.

El recurrente, funda su recurso en que la sentencia recurrida fue dictada con vicios que influyeron sustancialmente en lo dispositivo del fallo, respecto de los cuales se recurre de nulidad por las causas legales siguientes: En la primera causal, invoca la del artículo 478 letra e) en relación con el artículo 456 N° 6, ambos del Código del Trabajo: la sentencia no tiene un pronunciamiento de todas las cuestiones sometidas a su decisión. Esta causal se interpone conjuntamente con la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, en su vertiente de infracción de ley que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo; en particular, se acusa como infringido lo establecido en el artículo 177 del estatuto laboral.

En subsidio de las causales anteriores, interpone la causal de nulidad del artículo 477 del Código del Trabajo, por infracción de ley que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo y acusa como infringidos el artículo 79 de la Ley N°16.744 y el artículo 2.514 del Código Civil.



En subsidio de la causal anterior, invoca la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, infracción de ley que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo y en este caso, acusa como infringidos los artículos 69 letra b) y 88 de la Ley N°16.744 y los artículos 1556 y 1558 del Código Civil.

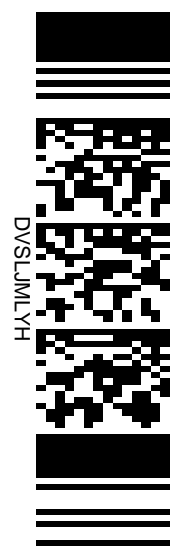
El 12 de noviembre último, se procedió a la vista del recurso compareciendo en la respectiva audiencia, alegando por el recurso, el abogado don Oscar Gonzalo Guajardo Cabello, por la demandada, y contra el arbitrio, don Eduardo Enrique González Lara, quedando la causa en estudio.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente en representación de la demandada invoca como primera causal de nulidad la contemplada en el artículo 478 letra e) en relación con el artículo 459 N° 6 del Código del Trabajo, conjuntamente con la causal del artículo 477 del mismo cuerpo legal, infracción de ley que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, señalando como norma infringida el artículo 177 del estatuto laboral. Mediante estas causales cuestiona, primeramente, el hecho de que el tribunal *a quo* no resolvió la excepción de finiquito que se opuso respecto de la demanda de indemnización de perjuicios por enfermedad profesional interpuesta por don Juan Galleguillos Pangué. Así también, se impugna la decisión del tribunal *a quo* de rechazar la excepción de finiquito que se opuso respecto de los trabajadores señores Mario Reinoso Cotaipi, Miguel Rivera Rivera y Carlos Urbina Canales.

El recurrente refiere que en el considerando décimo de la sentencia el juez *a quo* sólo se pronuncia respecto de la excepción de finiquito correspondiente a los señores Mario Reinoso Cotaipi, Miguel Rivera Rivera y Sebastián Urbina Canales, sin emitir pronunciamiento alguno respecto de la excepción de finiquito que se opuso para el caso del señor Juan Galleguillos Pangué. Señala, respecto de las excepciones de finiquito en las que sí existió pronunciamiento, que el juez de la causa decide rechazarlas, fundado esa decisión en que los finiquitos en cuestión no contienen una renuncia expresa de las acciones de indemnización de perjuicios por enfermedad profesional.

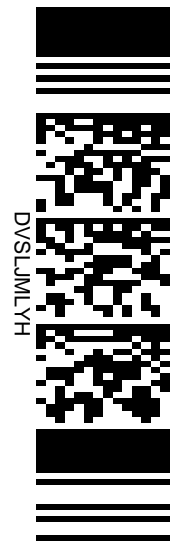
Expresa que, existen dos vicios que se configuran conjuntamente, toda vez que, por una parte, el juez *a quo* no se pronunció respecto de una



excepción de finiquito opuesta para el caso del señor Galleguillos y, por otra, rechazó las excepciones de finiquito de las que sí conoció, con clara infracción a lo establecido en el artículo 177 del Código del Trabajo.

Desarrolla la causa del artículo 478 letra b) en relación al artículo 459 N° 6 citados, indicando que uno de los requisitos que debe contener la sentencia, conforme dicho precepto legal, es que debe contener “la resolución de las cuestiones sometidas a su decisión” y que en la contestación de la demanda el recurrente opuso expresamente la excepción de finiquito respecto de cuatro trabajadores: Mario Reinoso Cotaipi, Juan Galleguillos Pangué, Miguel Rivera Rivera y Carlos Urbina Canales y sin embargo, en el considerando décimo de la sentencia, únicamente se resolvió la excepción de finiquito correspondiente a los señores Reinoso Cotaipi, Rivera Rivera y Urbina Canales, omitiendo así un pronunciamiento respecto de la excepción de finiquito que se opuso respecto del señor Galleguillos Pangué, agrega que el finiquito correspondiente a señor Galleguillos Pangué sí consta en el proceso, y que incorporó en la audiencia de juicio, que corresponden a los documentos N°22 y 23 y el sentenciador de primera instancia, pese a tener los elementos para ello, omitió completamente un pronunciamiento respecto de la excepción de finiquito que opuso para el caso del señor Galleguillos Pangué, configurando así el vicio de nulidad que denuncia en su recurso.

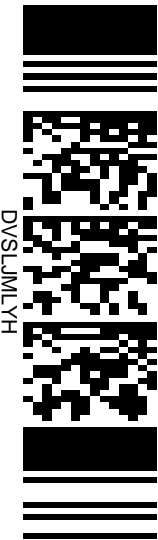
Respecto de la causal de nulidad del artículo 477 del Código del Trabajo, en relación a la infracción del artículo 177 del Código del Trabajo, transcribe dicha norma y menciona que el finiquito constituye una convención que el Código del Trabajo contempla celebrar respecto de una relación laboral a la cual se ha puesto término previamente por cualquier causa, agrega que por medio de este instrumento se saldan las obligaciones pendientes de la relación laboral o se conviene la forma que se les dará cumplimiento, en su caso, debiendo el empleador ponerlo a disposición del ex trabajador, dentro de los plazos y formas que se establecen en la citada norma legal. El finiquito es una convención de carácter solemne, y que la doctrina laboral y jurisprudencia de los Tribunales de Justicia han entendido que posee en la mayoría de las ocasiones un carácter transaccional; es, en consecuencia, un equivalente jurisdiccional, por lo que el finiquito de la relación laboral tiene pleno poder liberatorio para las partes, por lo que “no es



dable a las partes hacer revisar ninguna pretensión que dimanase del contrato fenecido”, ya que todo ha quedado zanjado al momento en que se suscribe dicho instrumento, salvo que exista una reserva de derechos, que no es el caso de autos.

Luego señala las fechas en que los trabajadores, suscribieron sus finiquitos: a) Don Mario Reinoso Cotaipi firmó finiquito el 31 de octubre de 1994, habiéndole sido diagnosticada la enfermedad profesional de silicosis por Resolución N°5/9674 de la Compin de fecha 26 de agosto 1993; b) Don Juan Galleguillos Pangue suscribió su finiquito el 21 de enero de 2016, luego de haberse acogido a un Plan de desvinculación asistida, donde se le hicieron pagos extraordinarios por concepto de enfermedad profesional, y suscribió su finiquito con fecha 28 de diciembre de 2015 y un convenio aceptación de condiciones para la materialización de plan desvinculación asistida 2013-2016, donde también otorgó amplio, completo y total finiquito a la Empresa. c) Don Miguel Rivera Rivera suscribió finiquito el 5 de enero de 2004 y también se acogió a un Plan de desvinculación asistida, teniendo presente además que a la fecha de su retiro no presentó neumoconiosis, según da cuenta la resolución N°952 de 20 de abril de 2005 de la COMPIN. d) Don Carlos Sebastián Urbina Canales suscribió finiquito el 30 de noviembre de 1998, habiendo recibido una indemnización adicional especial por concepto de enfermedad profesional. Cabe señalar que su enfermedad profesional fue diagnosticada por Resolución N°51 de 13 de enero de 1994 por parte de la Compin.

Releva que todos instrumentos fueron suscritos por los trabajadores, en pleno conocimiento de la enfermedad profesional que padecían, silicosis, de manera que ese fue un antecedente que estuvo presente a la hora de firmar estos instrumentos, que los trabajadores se acogieron a planes asistidos de retiro, los que precisamente existen para los casos en que se presenta una enfermedad profesional, que los trabajadores percibieron una indemnización especial de parte de la demandada por enfermedad profesional que dicen padecer y que en todos esos instrumentos se otorgó pleno y total poder liberatorio a las partes, renunciándose a toda acción que pudiera derivarse de la relación laboral que las vinculó, por lo que no cabía otra alternativa que, la de acoger la excepción de finiquito.



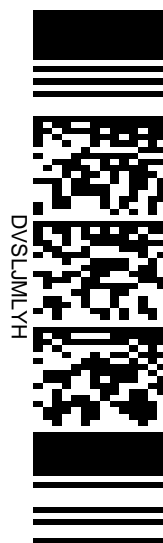
Sobre la forma cómo estos vicios influyeron sustancialmente en lo dispositivo del fallo, señala que, de no haberse incurrido en el vicio de nulidad establecido en el artículo 478 letra e) en relación con el artículo 459 N°6 del Código del Trabajo, la sentencia necesariamente habría emitido un pronunciamiento respecto de la excepción de finiquito que se opuso a la demanda interpuesta por el señor Galleguillos Pangue y que de no haberse infringido lo establecido en el artículo 177 del Código del Trabajo, el juez a quo habría arribado a la conclusión de que todos los finiquitos suscritos por su representada y los trabajadores referidos otorgaron pleno y total poder liberatorio respecto de cualquier acción y pretensión que pudiera emanar de las relaciones laborales anteriores, por lo que se debió haber acogido la excepción de finiquito opuesta por el recurrente.

SEGUNDO: En un segundo capítulo de nulidad, invoca en subsidio la causal de nulidad contemplada en el artículo 477 del Código del Trabajo, infracción de ley que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, señalando como normas infringidas los artículos 79 de la Ley 16.744 y el artículo 2514 del Código Civil.

Indica que el juez a quo rechazó la excepción de prescripción que opuso su representada en contra de la demanda de indemnización de perjuicios por enfermedad profesional interpuesta por cuatro de los cinco actores, a saber: don Mario Absalón Reinoso Cotaipi, don Juan Servando Galleguillos Pangue, don Oscar Orlando Godoy Rodríguez y don Carlos Sebastián Urbina Canales.

Añade que el fallo aplicó respecto del plazo de prescripción establecido en el artículo 79 de la Ley N°16.744, que los 15 años deben contabilizarse no desde el diagnóstico inicial de la enfermedad, sino que desde el último diagnóstico que se efectúe de ella.

Además, la sentencia recurrida estimó que los trabajadores antes señalados interpusieron su acción el 03 de diciembre de 2019 y notificada el 09 de diciembre del mismo año, dentro del plazo de prescripción, toda vez que el último diagnóstico de la enfermedad del señor Reinoso Cotaipi se verificó el 26 de mayo de 2011 por la COMPIN y el último diagnóstico del señor Galleguillos Pangue se verificó el 14 de septiembre de 2016 por parte de esa misma entidad. La acción deducida por los señores Godoy Rodríguez y Urbina Canales fue ejercida dentro de plazo, pero con un argumento

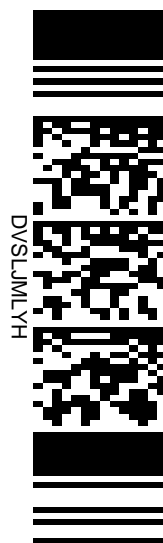


distinto, toda vez que en estos supuestos el juez a quo consideró como último diagnóstico no la última reevaluación realizada por la Compín, sino que la fecha de fallecimiento de estos trabajadores.

Sostiene que lo anterior, implica una evidente infracción a lo establecido en el artículo 79 de la ley N°16.744 y al artículo 2514 del Código Civil, pues juez computó el plazo de 15 años contados desde la fecha del último diagnóstico y ello constituye un yerro jurídico que no se condice con los hechos fijados en la causa e implica una errada interpretación y aplicación del artículo 79 de la Ley N°16.744.

Reconoce, que si bien la sentencia deja por establecido que la fecha inicial en que se diagnosticó la enfermedad de silicosis a estos trabajadores fue el 26 de agosto 1993, para el caso del Señor Reinoso Cotaipi y el 6 de enero de 1999, para el caso del Señor Galleguillos Pange, lo cierto es que considera que el plazo de prescripción no comienza a correr a contar de esa fecha, sino que éste recién empieza a andar desde la fecha del último diagnóstico por parte de la Compín, según las fechas señaladas anteriormente. Este razonamiento desarrollado por el juez a quo no se compadece con el tenor literal del artículo 79 de la Ley N°16.744, que señala expresamente que el plazo de prescripción para iniciar las acciones de esta naturaleza corre desde la fecha del diagnóstico, es decir, desde que se constata que un trabajador tiene una enfermedad que es susceptible de ser calificada como profesional.

Considera que en la sentencia se incurre en una confusión entre dos instituciones que son jurídicamente distintas; el diagnóstico, reconocido expresamente en el citado artículo 79 de la Ley N°16.744 y también en el artículo 76 bis del Decreto 101/1968, Ministerio del Trabajo que aprueba el Reglamento de la Ley N°16.744; y las reevaluaciones de incapacidad permanente que pueda hacer la Compín, que están regulada en el artículo 58 de la Ley N°16.744. Sostiene que lo que se indica en la sentencia recurrida significaría, incrementar artificialmente el plazo de prescripción que establece la citada norma legal, afectándose así la seguridad jurídica que otorga dicho precepto y que no busca más que otorgar certeza a las partes respecto de cuándo comienza a correr el plazo de prescripción para ejercer las acciones que ella reconoce, el juez a quo ha invocado una de las prescripciones de más largo tiempo que contempla el ordenamiento jurídico,



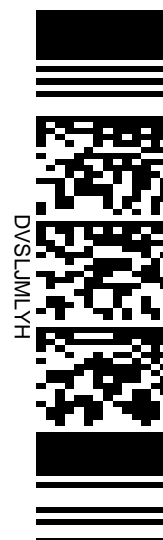
esto es 15 años, estableciendo que, no puede sostenerse, sin contrariar el espíritu de esa norma, que dicho plazo pueda aumentarse, aún más, so pretexto de las nuevas recalificaciones que puedan realizarse de una enfermedad profesional.

Señala, que el criterio que la jurisprudencia y la doctrina es que el plazo de prescripción que se contempla en el artículo 79 de la Ley N°16.744 debe contabilizarse desde el diagnóstico de la enfermedad, es decir, desde que el trabajador toma conocimiento de ella y está en condiciones de iniciar una acción de perjuicios por enfermedad profesional, y no desde la última resolución de recalificación de la incapacidad.

Concluye que en dos casos, la acción para iniciar una demanda de esta naturaleza se encontraba prescrita, toda vez que desde el 26 de agosto de 1993 fecha del diagnóstico de la enfermedad del señor Reinoso Cotaipi y el 6 de enero de 1999 fecha de diagnóstico para el caso del señor Galleguillos y la fecha de interposición y/o notificación de la demanda de autos, transcurrió con creces el plazo de 15 años que contempla el artículo 79 de la Ley N°16.744.

Respecto de los trabajadores Godoy Rodríguez y Urbina Canales la infracción de lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley N°16.744, va aún más allá, pues el último diagnóstico de la enfermedad profesional que padecieron los señores Godoy Rodríguez y Urbina Canales no es la última recalificación efectuada por la Compin, sino que es el constatado en el Certificado Médico de Defunción de cada uno de ellos, lo que es un error jurídico y conlleva igualmente, a una errada interpretación y aplicación de lo establecido en el artículo 79 de la Ley N°16.744, pues el diagnóstico de la enfermedad profesional que provoca invalidez, corresponde a una institución reconocida y regulada expresamente por el derecho, que pueden realizar esta acción, que son las COMPIN, en conformidad al artículo 76 del Decreto Supremo N°101 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en el que se determina precisamente el grado de incapacidad que tendrá el trabajador.

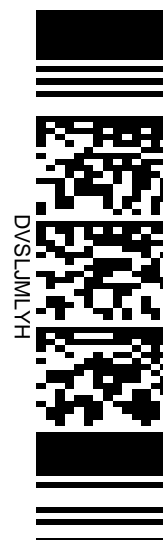
Agrega que la voz “diagnóstico” que contiene el artículo 79 de la Ley N°16.744 no se refiere a cualquier constatación médica que efectúa un facultativo y mucho menos en un Certificado Médico de Defunción, sino que corresponde a aquel que realiza el organismo legalmente facultado para tal efecto, la Compin. Este entendimiento de lo que significa el “diagnóstico”



para efectos de la Ley N°16.744 es el que ha tenido, la Superintendencia de Seguridad Social, la cual ha señalado en su doctrina que, para efectos del cómputo del plazo de prescripción que se contiene en el artículo 79 de la ley 16.744, debe estarse a la fecha del diagnóstico realizado por la Compin, señalando en su Oficio N°034594 de 18 de agosto de 2002, lo siguiente: “Conforme lo antes expuesto, no cabe sino concluir que el plazo de prescripción se computa desde la fecha del correspondiente diagnóstico emitido por la correspondiente COMPIN e independientemente de la fecha en que el trabajador haya terminado su relación con su empleadora.” Agrega que el término “diagnóstico”, según lo establece la Real Académica de la Lengua Española, no está ligado a las causas que motivan el fallecimiento de una persona -esa es una autopsia-, sino que dicen relación con la “determinación de la naturaleza de una enfermedad mediante la observación de sus síntomas”; o la “calificación que da el médico a la enfermedad según los signos que advierte”.

Expresa que tampoco corresponde considerar la información contenida en un Certificado Médico de Defunción como un diagnóstico para efectos de las prestaciones y/o indemnizaciones que se contienen en la Ley N°16.744, desde el momento que el cuerpo normativo que regula la emisión de esos certificados, el Reglamento N°460/1970, Ministerio de Salud Pública, que fija el Reglamento Sobre Extensión de Certificado Médico de Defunción jamás ha empleado ese término. Agrega que no tiene sentido atribuir a la constatación efectuada en el Certificado Médico de Defunción el carácter de “diagnóstico” para soslayar el plazo de prescripción que establece el artículo 79 de la Ley N°16.744, puesto que el sistema indemnizatorio y compensatorio que contempla dicho cuerpo normativo está construido en base a la pérdida de ganancia que sufre un trabajador a raíz de un accidente del trabajo o de una enfermedad profesional y no por su muerte.

Destaca que incluso la jurisprudencia ha extendido el plazo de prescripción establecido en el artículo 79 de la Ley N°16.744 estimado que este plazo se cuenta desde el “diagnóstico con inhabilitación”, es decir, aquel que es efectuado por la Compin, en conformidad al artículo 76 del Decreto Supremo N°101/1969 Mintrab, pero jamás se ha llegado al extremo de considerar como un diagnóstico de enfermedad profesional, la



información contenida en un Certificado Médico de Defunción. (Excma. Corte Suprema, Rol 2661-2015, de 4 de marzo de 2016).

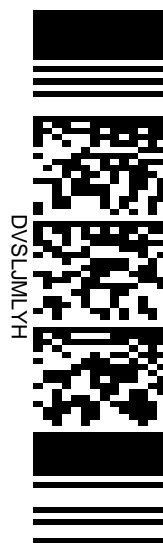
Concluye que las acciones iniciadas por los señores Godoy Rodríguez y Urbina Canales para demandar a su representada por las indemnizaciones que se deriven de los perjuicios que les ocasionó la enfermedad profesional se encuentran prescritas y que, si incluso se toma la última evaluación realizada por la Compin, para el caso del señor Urbina, ésta fue el 06 de junio de 2000; y en el caso del señor Godoy fue el 22 de marzo de 1988, de manera que a la fecha de presentación y/o notificación de la demanda, transcurrió con creces el plazo de 15 años que contempla el artículo 79 de la Ley N°16.744.

Respecto de la infracción de ley denunciada al artículo 2514 del Código Civil, ésta se produce porque no se le dio aplicación y es consecuencia de la errada interpretación y aplicación que tuvo el juez del tribunal a quo del artículo 79 de la Ley N°16.744 en las dos situaciones referidas. Si se hubiese interpretado de forma correcta la citada disposición legal el precepto de la Ley N°16.744, el juez debió haber dado aplicación a lo establecido en el artículo 2514 del Código Civil, norma legal que establece que la prescripción extingue las acciones y derechos.

En cuanto al modo que el vicio influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo, señala que si no se hubiese infringido lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley N°16.744 y en el artículo 2514 del Código Civil, se habría arribado a la ineludible conclusión de que el plazo para iniciar la acción de indemnización de perjuicios por enfermedad profesional por parte de los señores Reinoso Cotaipi, Galleguillos Pange, Godoy Rodríguez y Urbina Canales se encontraba prescrito, de manera que se debió haber acogido la excepción de prescripción opuesta por la demandada para estos casos.

TERCERO: En el tercer capítulo de nulidad, el recurrente invoca en subsidio la causal contemplada en el artículo 477 del Código del Trabajo y denuncia la infracción de los artículos 69 letra b) y 88 de la Ley 16.744 y los artículos 1556 y 1558 del Código Civil.

La causal se fundamenta en que el considerando décimo sexto del fallo declara la transmisibilidad del daño moral de los trabajadores don Carlos



Urbina Canales y don Oscar Godoy Rodríguez y establece que quien ha padecido un daño moral lo ha incorporado a su patrimonio.

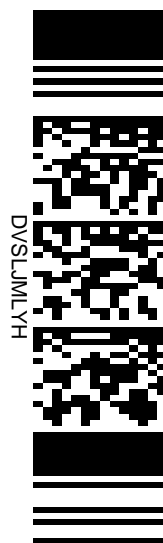
Asimismo, cuestiona la decisión del tribunal a quo de conceder una indemnización por lucro cesante para los señores Reinoso Cotaipi, Galleguillos Pange y Rivera Rivera, cuyo fundamento está en que las personas antes citadas se han “visto privados de desarrollar las labores que venían ejecutando como consecuencia de la enfermedad que les fue diagnosticada, teniendo porcentajes de discapacidad que les impide el desenvolvimiento en los oficios para los cuales se encontraban capacitados”. De esta forma, se concede esta indemnización, tomando como parámetro “el curso normal de los acontecimientos”.

Refiere que existe infracción de los artículos 69 letra b) y 88 de la Ley 16.744, pues el daño moral no es transmisible, por lo que en el considerando décimo sexto ha infringido dichos preceptos de la Ley N°16.744, al estimarse que la acción para demandar el daño moral sufrido por los trabajadores mencionados es transmisible a sus herederos.

Cita el artículos 69 letra b) de la Ley N°16.744, que en lo pertinente reza: *“Cuando, el accidente o enfermedad se deba a culpa o dolo de la entidad empleadora o de un tercero, sin perjuicio de las acciones criminales que procedan, deberán observarse las siguientes reglas: (...) b) La víctima y las demás personas a quienes el accidente o enfermedad cause daño podrán reclamar al empleador o terceros responsables del accidente, también las otras indemnizaciones a que tengan derecho, con arreglo a las prescripciones del derecho común, incluso el daño moral.”*

Por su parte, el artículo 88 del mismo cuerpo legal dispone que: *“Los derechos concedidos por la presente ley son personalísimos e irrenunciables.”*

Refiere que el correcto entendimiento de dichas normas legales y la forma como ambas interactúan entre sí, lleva a la ineludible conclusión que la acción para reclamar el daño moral propio, es decir, el que sufrió el trabajador con ocasión de la enfermedad profesional, no se transmite a los herederos de éste. Confirma lo anterior, en primer lugar, el tenor literal de lo establecido en el artículo 88 de la Ley N°16.744, que señala que los derechos que establece dicha ley, dentro de los que se encuentra el derecho a reclamar una indemnización por daño moral conforme el artículo 69 letra b)



de la misma ley, son de carácter personalísimos, es decir, cuya titularidad únicamente le corresponde al trabajador que sufrió la enfermedad y no a los herederos.

Razona que el carácter personalísimo de la indemnización por daño moral está dado por cuanto éste tiene por objeto compensar el daño sufrido por el trabajador, es decir, su propio dolor, molestias o sufrimiento, no siendo procedente, en consecuencia, que una indemnización de esta naturaleza le sea entregada a sus herederos, por cuanto ellos se aprovecharían de una indemnización que tiene otros fundamentos o causas. Agrega que no debe perderse de vista que, adoptar la posición sostenida por el juez a quo en la sentencia, implica que en la especie exista un cúmulo de acciones, toda vez que las herederas tendrán derecho a reclamar, por una parte, el daño moral del trabajador fallecido y, por otra, su daño moral o daño por reflejo, lo que no parece razonable, pues la finalidad de la indemnización por daño moral no es volver las cosas al estado anterior, sino que ella tiene por objeto que la persona que padeció dicho mal puede utilizar el monto de esta indemnización para apalear los daños que le provocó el accidente, cuestión que no puede lograrse si ella es entregada a los herederos, según lo ha resuelto la doctrina y la jurisprudencia que cita.

El recurrente se pregunta; ¿cómo el juez determinó la existencia de este supuesto daño moral si ni siquiera conoció a los trabajadores fallecidos?, pues se trata de una inferencia desprovista tanto de sustento jurídico como también fáctico, lo que irremediablemente debe llevar a concluir que se han infringido las citadas normas legales.

Respecto a la infracción de lo dispuesto en la letra b) del artículo 69 de la Ley N°16.744 en relación los artículos 1556 y 1558 del Código Civil, señala que no procede una indemnización por lucro cesante para los trabajadores Reinoso Cotaipi, Galleguillos Pange y Rivera Rivera, pues se produce una infracción de las citadas normas legales, las que regulan el régimen de responsabilidad e indemnizatorio a causa de enfermedades profesionales, pues se accedió a una indemnización por lucro cesante en circunstancias que no concurren los presupuestos para que esta proceda, por cuanto el daño alegado por los demandantes por este concepto no resulta ser cierto, pues como lo deja establecido la sentencia, los contratos de trabajo de los demandantes finalizaron por su propia voluntad, incluso antes de que se

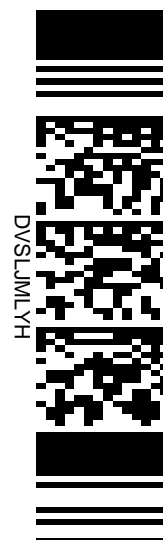


realizaran las últimas evaluaciones médicas.

Detalla al respecto que el señor Reinoso Cotaipi terminó su contrato de trabajo con la División, por la causal de renuncia voluntaria del artículo 159 N°2 del Código del Trabajo, el 31 de octubre de 1994 y su última reevaluación por parte de la Compín fue el 26 de mayo de 2011. Por su parte, el Sr. Galleguillos Pange terminó su contrato de trabajo con la División, también por la causal de renuncia voluntaria, el 31 de diciembre de 2001 y su última reevaluación de parte de la Compín fue el 19 de mayo de 2016. Finalmente, el Señor Rivera Rivera finalizó su relación laboral con la Empresa, por la causal de mutuo acuerdo de las partes según el artículo 159 N°1 del Código del Trabajo el 5 de enero de 2004, siendo su evaluación de incapacidad calificada por Compín el 14 de septiembre de 2016.

El recurrente refiere que es fundamental para establecer la procedencia de una indemnización por lucro cesante, que los trabajadores en cuestión, al momento de evaluarse y reevaluarse sus grados de incapacidad, no mantenían una relación de trabajo vigente con la demandada por su propia decisión y la indemnización por lucro cesante requiere que se esté en presencia de un daño cierto, sin embargo el fallo que concede la indemnización por un lucro cesante, se fundó en eventuales remuneraciones que habrían obtenido los trabajadores mencionados, desde el período en que finalizó su contrato hasta su edad de jubilación de 65 años, lo que es improcedente por tratarse de un derecho que no es indiscutible y que tampoco es real, pues la enfermedad profesional que les fue diagnosticada no se tradujo en su despido, sino que su relación de trabajo con la demandada terminó por su propia voluntad, e incluso para acogerse a planes de retiro con el pago de una indemnización especial por retiro.

Agrega que el daño alegado no es cierto, pues los trabajadores en cuestión no tenían la certeza de que iban a percibir las mismas remuneraciones a las que tenían derecho con ocasión de los servicios que prestaban para la División, da como ejemplo que si la División hubiese puesto término a los contratos de trabajo de forma unilateral, es decir, mediante un despido, fundado precisamente en el hecho de haberseles detectado la enfermedad que padecen, en ese caso, posiblemente podría configurarse una indemnización por lucro cesante, toda vez que, por simple voluntad de la Empresa, los trabajadores dejaron de percibir sus



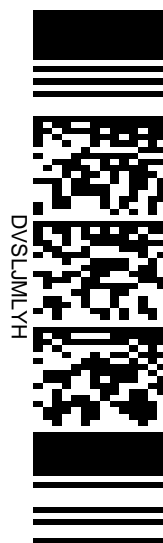
remuneraciones por padecer de una enfermedad, pero en este caso ocurre lo contrario, por mera voluntad de los trabajadores dejaron de percibir sus remuneraciones, al haber cesado su relación laboral mediante las causales de renuncia y mutuo acuerdo de las partes.

Agrega que si bien teóricamente es posible sostener la procedencia de una indemnización por lucro cesante, lo que ocurre es que, aplicando el mismo dogma que el sostenido en la sentencia, el curso ordinario de las cosas; este lleva a concluir una cuestión absolutamente contraria, los trabajadores en cuestión no se vieron privados de sus remuneraciones por el padecimiento de su enfermedad profesional, puesto que ellos mismos dejaron de prestar servicios para la División por su voluntad propia y que además la enfermedad profesional que sufrían no tuvo ningún impacto previsible en sus remuneraciones, desde el momento que ellos, de voluntad propia, dejaron de prestar servicios, lo que inexorablemente implicaría que dejaran de percibirlas.

Agrega que lo señalado en el párrafo anterior, es fácil de contrastar para los casos en que sí se ha accedido a indemnizaciones de esta naturaleza, por ejemplo, para el término anticipado e injustificado de un contrato a plazo o por obra y faena determinada. En esas situaciones, es claro que existe un lucro cesante que compensar, desde el momento que, por un hecho culposo del empleador, el despido injustificado, se ha provocado un perjuicio que es cuantificable para el trabajador, los “salarios caídos”. Sin embargo, en el presente caso eso no es así, y reitera que los trabajadores no mantenían una relación laboral vigente con la demandada.

Cita jurisprudencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Antofagasta, que ha sido clara en señalar que la fórmula de cálculo empleada por el juez a quo no es correcta, ni procedente, para poder justificar el otorgamiento de una indemnización de esta naturaleza, pues: *“Se basa en un simple cálculo de posibilidades que le hace multiplicar la capacidad de ganancia a la fecha del accidente por el tiempo que le falta para que cumpla 65 años. Ello, es un mero cálculo de probabilidad que no resiste mayor análisis certero que produzca la convicción para admitirlo o ratificarlo por una decisión jurisdiccional.”* (Sentencia de 13 de diciembre de 2002, Gaceta Jurídica N° 270, pág. 183 y ss.)

Agrega que tampoco resulta acertado lo indicado en la sentencia



respecto a que era carga de la demandada “demostrar que los trabajadores se habían reincorporado a otra clase de actividad o que estuvieren percibiendo ingresos que se deben deducir de los proyectos”. Lo anterior, evidentemente, porque quien alega el daño es quien debe probarlo, y lo cierto es que era de carga de los demandantes acreditar esta circunstancia, tal como lo ha señalado en fallo, la Excma Corte Suprema: *“Que, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 1556 del Código Civil, la indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y el lucro cesante y este último ha sido conceptualizado como la pérdida cierta de la ganancia probable, de modo que deben acreditarse, por quien pretende su reparación, los presupuestos necesarios para hacerlo procedente, es decir, la merma efectiva del beneficio o provecho que se habría obtenido en determinadas condiciones. En el caso, se ha partido del supuesto constituido por la labor realizada por el trabajador, sin calificación y su edad, sin embargo, ninguna de esas circunstancias puede considerarse como antecedente suficiente para tener por concurrente lucro cesante, desde que ambas son conjeturas, por cuanto suponen presumir, sin fundamento conocido alguno, que la víctima sobrevivirá el tiempo necesario y con un ingreso permanente y determinado, el cual habrá dejado de percibir en razón de la incapacidad que lo afectó.”* (CS fallo causa rol N° 2049-2008.)

Refiere que durante todo este tiempo los actores a los que se les concedió esta indemnización, han tenido derecho a las prestaciones que se establecen en la Ley N°16.744 y debe considerarse que el seguro en cuestión, excluye la posibilidad de obtener una segunda compensación por el mismo concepto, puesto que en tal caso estaríamos ante un enriquecimiento injusto, pues los Tribunales Superiores de Justicia han sido categóricos en fijar como criterio que la indemnización jamás puede ser fuente de ganancia: *“Que, a mayor abundamiento la indemnización del daño material debe ser integral, pero no puede constituir ocasión de ganancia para su beneficiario, principio que no puede omitirse a la hora de computar el eventual perjuicio derivado del lucro cesante.”* (Iltma. Corte Apelaciones Santiago, fallo causa rol N° 6093-2000).

Concluye, existe una clara infracción de las normas que regulan el régimen indemnizatorio que se contempla en la Ley N°16.744 y en el Código Civil; se vulnera el artículo 69 letra b) de la Ley N°16.744, que hace aplicable



la normativa contenida en el Código Civil a las indemnizaciones que proceden a causa de enfermedades profesionales y lo establecido en el artículo 1556 del Código Civil, que contempla dentro de las indemnizaciones que proceden a causa de enfermedades profesionales la indemnización por lucro cesante; además se infringe el artículo 1558 del mismo cuerpo legal, que sólo obliga a compensar aquellos perjuicios que se previeron o pudieron preverse al tiempo del contrato, para los casos en que el incumplimiento se deba a la culpa del deudor, pero no aquellos perjuicios que son consecuencia inmediata de este, pues ellos solo proceden cuando existe dolo, que no es el caso.

Concluye que el vicio que se ha denunciado ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, puesto que, de no haberse infringido lo establecido en los artículos 69 letra b) y 88 de la Ley N°16.744, el tribunal hubiese llegado a la ineludible conclusión de que la acción para reclamar el daño moral de los señores Carlos Urbina Canales y Oscar Godoy Rodríguez era intransmisible y, por ello, que las demandantes carecían de legitimidad activa para reclamar dicha indemnización. Por su parte, si es que no se hubiese infringido lo establecido en el artículo 69 letra b) del Código del Trabajo y en los artículos 1556 y 1558 del Código Civil, se habría arribado a la conclusión de que no procedía otorgar a los señores Reinoso Cotaipi, Galleguillos Pangue y Rivera Rivera una indemnización por lucro cesante.

Finalmente, solicita se anule la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de Diego de Almagro y, acto seguido, dicte la correspondiente sentencia de reemplazo, en la que se acoja la excepción de finiquito opuesta por su parte en contra de las demandas de indemnización de perjuicios por enfermedad profesional iniciadas por Mario Reinoso Cotaipi, Juan Galleguillos Pangue, Miguel Rivera Rivera y Carlos Urbina Canales. En subsidio de lo anterior, solicita se anule dicha sentencia y se dicte la correspondiente sentencia de reemplazo, en la que se acoja la excepción de prescripción opuesta en contra de la demanda de indemnización de perjuicios por enfermedad profesional iniciada por los señores Sebastián Urbina Canales, Oscar Godoy Rodríguez, Mario Reinoso Cotapi y Juan Galleguillos Pangue. En subsidio de lo anterior, peticiona se anule dicha sentencia y se dicte la sentencia de reemplazo, en la que se declare que nada se adeuda por concepto de daño moral a los señores Carlos Urbina



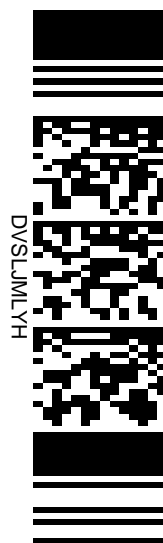
Canales y Oscar Godoy Rodríguez; y que tampoco nada se adeuda por concepto de lucro cesante a los señores Mario Reinoso Cotaipi, Juan Galleguillos Pangué y Carlos Urbina Canales. Todo lo anterior, con costas.

CUARTO: Que antes de entrar al estudio del recurso interpuesto, debe tenerse presente que el arbitrio de nulidad es un medio de impugnación de derecho estricto, al cual la ley ha rodeado de exigencias que deben ser cumplidas por la parte recurrente, sin dejar de considerarse, que se está atacando la validez de un fallo y no lo que el recurrente pueda estimar como su justicia. En otras palabras, no se trata solamente que la resolución del tribunal a quo no sea del agrado de quien recurre, sino que en su pronunciamiento deben haberse obviado los requisitos que la ley impone.

QUINTO: Que, por otra parte, el recurso de nulidad contemplado en el proceso laboral, se sustenta en dos categorías de causales: la primera de ellas, de carácter genérico, consagrada en el artículo 477 del Código del Trabajo, consistente en infracción sustancial de derechos constitucionales o de ley que hubiese influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo; y la segunda, específica, prevista en las diferentes letras del artículo 478 del mismo texto legal, pudiendo invocarse distintas causales, conjunta o subsidiariamente, pero cada una de ellas fundamentada de manera concreta y coherente con el vicio denunciado.

SEXTO: Que el recurso se funda en primer término en la causal de nulidad contemplada en el artículo 478 letra e) en relación con el artículo 456 N° 6, ambos del Código del Trabajo, esto es, la sentencia no tiene un pronunciamiento de todas las cuestiones sometidas a su decisión, esta causal se interpone conjuntamente con la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, esto es, infracción de ley que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo; en particular, se acusa como infringido lo establecido en el artículo 177 del estatuto laboral.

SEPTIMO: Que resulta conveniente establecer que la causal del artículo 477 del Código Laboral concierne en forma privativa a la revisión del juzgamiento jurídico, esto es, al juicio de derecho contenido en la sentencia, tarea que implica un examen de lo resuelto en la sentencia con la ley que regula el caso y la referida causal; opera sobre diversas conjeturas, a saber: a) Contravención formal del texto de la ley, lo que acontece cuando se produce una manifiesta transgresión de la norma, lo que supone su falta de



acatamiento; b) Falta de aplicación, lo que sucede cuando el juzgador deja de aplicar una ley no obstante que es llamada a resolver el asunto; c) Aplicación indebida, se verifica cuando la ley es aplicada a un caso para el que no ha sido prevista y, d) Interpretación y aplicación errónea, puede acontecer cuando se sitúa a la ley en un sentido o significado distinto del que corresponde, es decir, no se la entiende; o bien cuando le es atribuido un alcance o finalidad diferente del que se busca a través de ella.

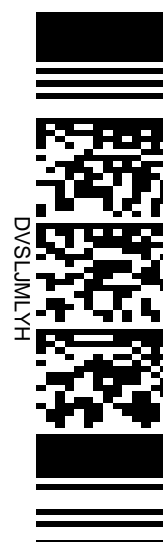
OCTAVO: Que así las cosas, la causal de nulidad contemplada en el artículo 478 letra e) en relación con el artículo 456 N° 6, ambos del Código del Trabajo, el recurrente la hace consistir en que la sentencia no tiene un pronunciamiento de todas las cuestiones sometidas a su decisión. En efecto el recurrente refiere que en el considerando décimo de la sentencia, el juez a quo sólo se pronuncia respecto de la excepción de finiquito correspondiente a los señores Mario Reinoso Cotaipi; Miguel Rivera Rivera; y Sebastián Urbina Canales, sin emitir pronunciamiento alguno respecto de la excepción de finiquito que se opuso para el caso del señor Juan Galleguillos Pangué.

Al respecto y de la atenta lectura de la parte expositiva de la sentencia, en su página cuatro, se señala: *"En tercer lugar, se opone la excepción de finiquito en contra de todos los demandantes, excluido Oscar Godoy Rodríguez.*

En este sentido detalla que Mario Reinoso Cotaipí suscribió finiquito el 31 de octubre de 1994, siendo diagnosticado con la enfermedad el 26 de agosto de 1993.

Respecto de Juan Galleguillos Pangué, se indica que suscribió finiquito el 21 de enero de 2016, habiéndose acogido al plan de desvinculación asistida, donde existen pagos extraordinarios por concepto de enfermedad profesional, habiendo suscrito con fecha 28 de diciembre de 2015 un convenio de aceptación de condiciones para la materialización del plan.

En el caso de Miguel Rivera Rivera, se informa que suscribió finiquito el 5 de enero de 2004, se acogió al plan de desvinculación y, a la fecha del retiro, no presentaba neumoconiosis, según resolución de fecha 20 de abril de 2005 de la Compín.



En cuanto a Carlos Urbina Canales, se indica que suscribió finiquito el 30 de noviembre de 1998, recibiendo una indemnización especial por enfermedad profesional, la que fue diagnosticada el 13 de enero de 1994.”

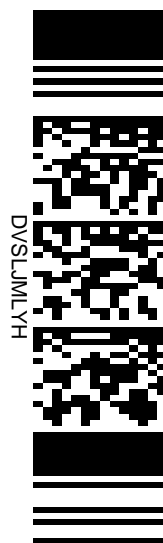
En el considerando décimo del fallo, se lee: “**DÉCIMO:** Excepción de finiquito: En relación a los trabajadores que suscribieron finiquitos y que se acreditó aquella suscripción, esto es, los señores Reinoso, Urbina y Rivera, aparece que ninguno de ellos renunció expresamente a las acciones para reclamar las indemnizaciones que persiguen en esta causa. “

Y en el resolutivo III del fallo impugnado, se tiene que efectivamente el sentenciador rechazó respecto de todos los trabajadores, la excepción de finiquito opuesta por el demandado, al señalar expresamente: “**III.** Que se rechazan íntegramente las excepciones de finiquito que han sido intentadas por la demandada. “

Que así las cosas, si bien existe una omisión en el considerando décimo del fallo, al mencionar a tres de los cuatro trabajadores que menciona su parte considerativa, al exponer la alegación de la excepción de finiquitos opuesta por la demandada, no es menos cierto, que la parte resolutive es clara, en cuanto a que dichas excepciones opuestas por la demandada, fue rechazada en su totalidad, por lo que esta causal no podrá prosperar.

Lo anterior considerando la aplicación del inciso tercero del artículo 478 del Código del Trabajo que expresamente establece: “No producirán nulidad aquellos defectos que no influyan en lo dispositivo del fallo...”, en atención al mérito de la causal de nulidad que en forma conjunta, se ha interpuesto por la demandada y que se analiza a continuación.

NOVENO: Que, en forma conjunta se planteó la causal de nulidad de infracción de ley y se sindicó como norma infringida la contenida en el artículo 177 del Código del Trabajo. A este respecto, es pertinente poner en relieve que lo propuesto en el recurso no es un tema relacionado con la eventual falta de validez del finiquito, sino que atañe al poder liberatorio del finiquito y, más específicamente, en qué medida comprendió los derechos de cada uno de los trabajadores involucrados, relacionados con la enfermedad profesional que aducen y respecto de la cual atribuyen culpa a su ex empleador. El asunto a dilucidar se traduce entonces en definir si la declaración formulada en los finiquitos alcanza o no a una eventual responsabilidad por la enfermedad profesional que los actores dicen



aquejarles y, por lo mismo, si tiene el poder liberatorio que se aduce por la demandada, bajo la forma de una excepción de finiquito.

DECIMO: Que, el finiquito es un acto jurídico bilateral, de carácter solemne, a través del cual las partes dan cuenta y dejan constancia del término de la relación laboral. Ese es su propósito primordial. Sin embargo, acontece que en el instrumento que contiene el finiquito también puede consignarse el reconocimiento de deudas o de créditos de orden laboral/patrimonial, puede incluirse la respectiva liquidación, puede hacerse constar el pago de las obligaciones y, en lo que resulta particularmente atiniente al caso sub lite, es frecuente que se realicen declaraciones en el sentido de término de la relación laboral y que nada se adeudan las partes, con ocasión de esa relación laboral.

La doctrina especializada indica que el finiquito se descompone en dos elementos: a) la declaración de que el contrato ha terminado o se ha extinguido; b) el “saldo de cuentas”; y c) la mentada declaración de que las partes nada se adeudan entre sí, como consecuencia del contrato de trabajo (Antonio Ojeda Valdés, “La renuncia de derechos del Trabajador”, citado por Américo Plá Rodríguez, en “Los Principios del Derecho del Trabajo”, Depalma, 1998, p. 161).

Se ha señalado igualmente que el finiquito recoge o puede recoger diversos negocios jurídicos, aludiéndose a tres posibilidades: 1.- El trabajador recibe una suma que corresponde exactamente a sus derechos: en esta situación hay recibo puro y simple; 2.- Las partes se ponen de acuerdo en sus pretensiones y se otorgan concesiones mutuas: en esta hipótesis se verifica una transacción; y 3.- El trabajador recibe sólo una parte de lo debido, sin que el empleador se comprometa a nada por ello: en tal caso existe condonación o renuncia. (Luis Enrique De la Villa, “El Principio de la Irrenunciabilidad de los Derechos Laborales”, en *Revista de Política Social*, N° 85, Enero-Marzo 1970, pp. 42/43, especialmente nota 84). En consecuencia, el acto que se analiza no es de contenido unívoco. Antes bien, es de naturaleza compleja (pago/recibo, renuncia y/o transacción). Por lo mismo, la mirada que ha de realizarse a su respecto, la comprensión que pueda o deba hacerse del mismo, no puede prescindir de dicha condicionante, porque de ello depende el alcance y eficacia que pueda asignársele.

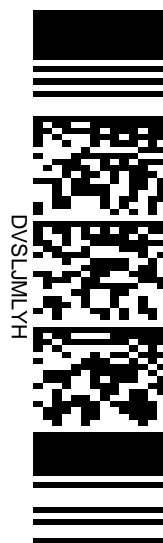


UNDECIMO: Que, en la especie, las excepciones planteadas por la demandada por los finiquitos de los actores, se verifican a juicio del recurrente en la suscripción por parte de los cuatro trabajadores demandantes, en los años 1994, 1998, 2004 y 2016, en pleno conocimiento que padecían de la enfermedad de silicosis, y que por medio de dichos finiquitos, pusieron fin a la relación laboral que los vinculaba en forma voluntaria, acordando el pago de las prestaciones e indemnizaciones legales y convencionales que ahí se señalan.

DECIMO SEGUNDO: Que, resulta ineludible destacar que en las estipulaciones aludidas en dichos finiquitos, no se hace referencia a derechos derivados de enfermedades profesionales, y menos a algún tipo de padecimiento, lo que desde ya pone en evidencia el carácter impreciso de los finiquitos, por lo que no es posible obviar que los pagos efectuados a los trabajadores están indudablemente referidos a prestaciones inherentes a una terminación de los respectivos contratos de trabajo y constituyen un recibo de pago de las prestaciones aludidas en los citados documentos, o sea, de lo que fuera efectivamente solucionado. De pretenderse, como lo sostiene la recurrente, que ello también involucraría una hipotética renuncia a sus derechos derivados de la enfermedad profesional que sirve de sustento a la demanda impetrada en autos, significaría que los trabajadores estarían abdicando de un derecho sin recibir nada a cambio.

Sobre el particular, al margen de si ello es no jurídicamente factible, lo que cierto es que, antes que todo, tendría que haber existido una manifestación explícita e inequívoca. Primero, porque compromete un derecho mínimo establecido en la ley, integrador del denominado “orden público social”, caracterizado por su inderogabilidad *in peius*; y, enseguida, porque esa eventual disponibilidad y renuncia tenía, además, un componente futuro, de momento que concernía a un derecho subjetivo que no se había incorporado al patrimonio del trabajador.

DECIMO TERCERO: Que, refuerza la conclusión anterior considerar ciertas reglas del derecho común que resultan pertinentes al caso. En efecto, a propósito de la transacción, el artículo 2462 del Código Civil establece que si ella recae sobre uno o más objetos específicos, la renuncia general de todo derecho, acción o pretensión “*deberá sólo entenderse de los derechos, acciones o pretensiones relativas al objeto u objetos sobre que se transige*”,

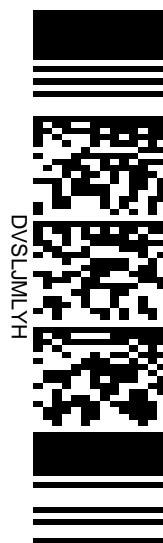


regla que es coherente con la contemplada en su artículo 1561 del mismo Código, de acuerdo con la cual: *“Por generales que sean los términos de un contrato, sólo se aplicarán a la materia sobre la que se ha contratado”*. Al hilo de lo que se viene diciendo, el artículo 1566 del Código Civil ratifica las conclusiones enunciadas.

La falta de precisión que es dable asignar a los finiquitos de los actores, en lo que tiene relación con la enfermedad de silicosis de los trabajadores, podemos señalar que nada se dice al respecto, y que las expresiones genéricas que contienen, toma la forma de la *“ambigüedad”* consultada en el inciso segundo del artículo 1566 antes citado. Es manifiesto que los finiquitos son redactados por la parte empleadora, de modo que sus estipulaciones ambiguas deben interpretarse en contra suya, porque ellas provienen de la falta de explicaciones que debieron darse necesariamente, esto es, indicar cuáles otros derechos comprendían los finiquitos suscritos por los trabajadores y, en particular, si ello abarcaba o no abarcaba posibles pretensiones derivadas de una enfermedad profesional, pero de una que fuera conocida y reconocida como tal, en forma concreta, por ambas partes.

DECIMO CUARTO: Que, como necesaria consecuencia de lo razonado, resulta que el objeto de los finiquitos invocados como fundamento de las excepciones deducidas no pudo ser otro que dejar constancia del término de la relación laboral y del pago de las indemnizaciones y prestaciones derivadas directamente del mismo. Por lo tanto, no puede hacersele extensivo a otros derechos diferentes, en términos que el error de derecho que se denuncia no es tal, desde que la sentencia impugnada en su basamento Décimo, priva de eficacia liberatoria a los finiquitos en comento, respecto de las pretensiones relativas a la enfermedad profesional de los actores, interpretación jurídica que por lo demás ha sido corroborado por sentencias dictadas por la Excelentísima Corte Suprema, en causa rol N° 7.113- 2010, de fecha 8 de julio de 2014 y en causa rol N° 8.325-2013, de 22 de abril de 2014, entre otras, de todo lo cual se advierte que la infracción de ley que la demandada reclama no puede prosperar, motivo por el cual no queda sino rechazar este apartado del recurso.

DECIMO QUINTO: Que, en un segundo capítulo de nulidad, a juicio del impugnante, la sentencia de autos ha sido dictada con infracción de ley en los términos que indica el artículo 477 del Código del Trabajo, acusando



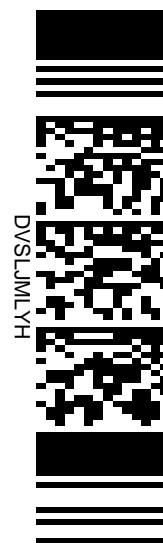
como infringidos el artículo 79 de la Ley N°16.744 y el artículo 2.514 del Código Civil, lo que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

Indica que la sentencia recurrida infringe el artículo 79 de la Ley 16.744 al señalar en el considerando Noveno y Undécimo, al momento de analizar las excepciones de prescripción opuestas por la parte demandada, el tribunal las rechaza por encontrarse dentro del plazo a que alude el precepto legal; el “último diagnóstico” de la enfermedad del señor Reinoso Cotaipi se verificó el 26 de mayo de 2011 por la Compin; y el “último diagnóstico” del señor Galleguillos Pange se verificó el 14 de septiembre de 2016 por parte de esa misma entidad, en el caso de la acción deducida por los señores Godoy Rodríguez y Urbina Canales fue ejercida dentro de plazo, toda vez que en estos supuestos el juez consideró como “último diagnóstico”, la fecha de fallecimiento de estos trabajadores.

DECIMO SEXTO: Que la disposición que se denuncia como mal aplicada es el artículo 79 de la Ley 16.744, que dispone: *“Las acciones para reclamar las prestaciones por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales prescribirán en el término de cinco años contado desde la fecha del accidente o desde el diagnóstico de la enfermedad. En el caso de la neumoconiosis el plazo de prescripción será de quince años, contado desde que fue diagnosticada. Esta prescripción no correrá contra los menores de 16 años.”*

Que como se ve -y la disposición en estudio lo confirma por la distinta fijación del momento inicial del conteo del plazo-, mientras el día determinado para principiar el plazo de prescripción en caso de accidente del trabajo resulta cierto o menos complejo de establecer, el conteo del mismo término se torna impreciso o más difícil de fijar, frente a una enfermedad profesional, básicamente porque los fenómenos que la constituyen necesitan manifestarse de manera evidente y, a su vez, constatarse científicamente por especialistas vinculados a la medicina, cuando no, reevaluarse cada cierto tiempo, dependiendo de la progresión o involución del mal sobreviniente.

Que con todo, el citado artículo 79 de la Ley 16.744, fija el principio de la prescripción de la acción reparatoria por enfermedad profesional y específicamente por neumoconiosis, estableciendo dicho evento en el momento del diagnóstico de la enfermedad. Sin embargo, la mencionada ley no define que debe entenderse por “diagnóstico”, ni entrega los elementos



para precisar su contenido. De manera que, dependiendo el sentido de la palabra “diagnóstico” de factores ajenos a la constatación inexperta, deberá atribuírsele el sentido que se le asigna por los expertos del área de salud conforme a lo preceptuado en el artículo 21 del Código Civil. Entonces resultará pertinente aproximarnos a su conceptualización mediante el empleo del diccionario de la lengua española, el que permite saber que por él se atiende al “arte o acto de conocer la naturaleza de una enfermedad mediante la observación de sus síntomas y signos”, como también otra acepción nos da cuenta que por ella se hace referencia a la “calificación que da el médico a la enfermedad según los signos que advierte”. A su turno, la voz “calificar” permite “apreciar o determinar las cualidades o circunstancias de alguien o de algo”.

Que la determinación del padecimiento de cierta enfermedad profesional puede ser precisado con mayor o menor extensión temporal, dependiendo de la realización de exámenes cuya complejidad dependa de factores externos, tales como, estudios radiológicos, exámenes de sangre, biopsias, etcétera, por lo que el resultado que de ellos emanará, necesariamente deberá pasar por el cedazo del especialista que, efectuando la labor de análisis que le competa, emitirá su dictamen o diagnóstico acerca del tipo de enfermedad detectada, acto conclusivo al que parece atender el citado artículo 79 para echar a correr la contabilización del plazo prescriptivo, no obstante, no podrá desatenderse la circunstancia que la idea que emana de la voz “diagnóstico” también considera la evaluación constante de las condiciones de salud del enfermo, que permitan entender la ratificación del dictamen anterior o su modificación hacia el restablecimiento, o hacia el agravamiento de la situación sanitaria.

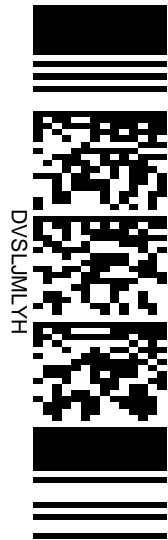
DECIMO SEPTIMO: Que la idea de observación constante a través del tiempo de la situación de salud de un beneficiario, queda de manifiesto en la definición de la mentada palabra, la que unida a la falta de determinación legal de la citada expresión en la Ley 16.744, y a la reiterada cita en ella de conceptos como declaración, evaluación, reevaluación y revisión de incapacidades, en los artículos 58 y siguientes de la mencionada ley, permite entender que la palabra diagnóstico no resulta unívoca. Por lo anterior, inicialmente no se puede identificar necesariamente la voz “diagnóstico” con ninguna de las expresiones antes señaladas, sino que en



realidad con todas ellas. Entonces, como fue expuesto en la motivación precedente, el sentido de la palabra “diagnóstico” gira en torno a la calificación médica de cierta patología cuya precisión se encuentra mediada por la realización de exámenes y la observación continua de su desarrollo. En otras palabras, la voz “diagnóstico”, si bien se encuentra asociada a la idea de determinación del padecimiento de salud por evaluaciones médicas, también va acompañada del sentido de seguimiento de la enfermedad, entre otras razones, para en las reevaluaciones posteriores, modificar el estado y las prestaciones a que el beneficiario tenga derecho dentro del marco del seguro previsto en la mencionada Ley 16.744.

DECIMO OCTAVO: Que así las cosas, es posible decir que las descripciones a que hace alusión la citada ley en sus artículos 58 y siguientes, cuando habla de la declaración, evaluación, reevaluación y revisión de las incapacidades, a que se encuentran sujetos los beneficiarios del sistema de seguro social que establece, vendrán acompañadas de un diagnóstico o de varios de ellos generados a través del tiempo, que den cuenta de la evolución del mal de salud de que se trate, confiriendo bajo este prisma a la voz “diagnóstico” un sentido acorde con su definición, esto es, reconociéndole, en principio, una doble función, determinar la enfermedad detectada en el paciente y, por otro lado, dar cuenta de su progresión o cambio a través del tiempo. Que entonces la acción interpuesta por los actores en contra de su ex empleadora, para resarcir daño moral, efectuada sobre la base de Resoluciones que emitieron el respectivo diagnóstico de la enfermedad y primera declaración de incapacidad, complementadas por la posterior reevaluación, cumple con la exigencia del diagnóstico requerido en el artículo 79 de la Ley N°16.744. Así, el plazo de prescripción de dicha norma, corresponde contarlo a partir de la data de la reevaluación o última declaración de la Compin respecto de cada uno de los actores, y si no transcurrieron los quince años exigidos por la ley para privar de valor a la acción resarcitoria en estudio, la acción no estaría prescrita y por tanto, no existe infracción de ley denunciada al referido precepto legal.

DECIMO NOVENO: Que, entonces la acción interpuesta por los actores señores Reinoso y Galleguillos en contra de su ex empleadora, para resarcir daño moral, efectuada sobre la base de resoluciones que emitieron el respectivo diagnóstico de la enfermedad y la última evaluación de la



enfermedad profesional, cumple con la exigencia del diagnóstico requerido en el artículo 79 de la Ley N°16.744. Así, contado el plazo de prescripción a partir de la data de la última evaluación, no transcurrieron los quince años exigidos por la ley para privar de valor a la acción resarcitoria en estudio, según se expresa en el motivo undécimo del fallo, al establecer como hechos: *“Ahora bien, en el campo fáctico, debemos estar a la fecha de la última evaluación pues, según el sentido que hemos dado a la voz “diagnóstico”, ellas son constitutivas en sí de un diagnóstico y dado que el legislador no distingue desde qué diagnóstico se computa el término de la prescripción, ya hemos dicho, por los motivos antes expuestos, que es desde el último. Por ende, la fecha del término de prescripción se cuenta, en el caso del señor Reinoso desde el 26 de mayo de 2011; en el caso del señor Galleguillos desde el 19 de mayo de 2016; y, a fin de completar los trabajadores demandantes, la del señor Rivera desde el 14 de septiembre de 2016, fecha en que fue dirimido el conflicto en cuanto a su padecimiento de silicosis por la Comisión Médica de Reclamos”.*

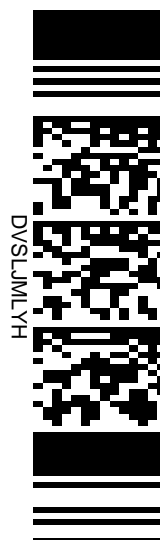
Que la acción por resarcimiento del daño moral provocado por la enfermedad profesional a los actores, busca la reparación del perjuicio extrapatrimonial que les generó la exposición a partículas de polvo mientras trabajaban para la demandada, por lo que se estima que resulta trascendente, a la hora de determinar el día inicial del cómputo del plazo de prescripción, fijado como día del diagnóstico en el citado artículo 79 de la ley 16.744, la fecha, momento o época, en que fue su última evaluación médica, de manera de no poner en duda la vinculación entre la detección del padecimiento de salud y las afectaciones demostrativas del daño moral, por lo que la data del daño extrapatrimonial reclamado se sitúa en un momento cercano al último pronunciamiento y no con anterioridad, de manera que tampoco, pensando las cosas de este modo, el plazo de prescripción pudo superarse ni advertirse mal aplicado en el fallo recurrido.

VIGESIMO: Que lo que se ha venido diciendo en el sentido de que no se ha detectado alguna infracción de ley respecto de la aplicación efectuada en el caso, sobre los hechos acreditados para los actores señores Reinoso y Galleguillos, del artículo 79 de la Ley N°16.744, se ve corroborado por la idea sustentada por el fallo dictado en causa rol N°2.661-2015, sobre unificación de jurisprudencia, de la Excma. Corte Suprema, pronunciamiento en que se



argumentó respecto de la eventual mala o incorrecta aplicación del artículo 79 de la Ley N°16.744, que para fijar el momento de inicio del referido plazo de prescripción se debía atender a la fecha de cada uno de los “diagnósticos” o “episodios” emitidos durante el padecimiento de la enfermedad y que den cuenta de su avance, precisamente de la forma en que lo entendieron los actores y lo refrendó en su sentencia el fallo.

En forma específica, para ser más certeros, el considerando duodécimo del citado fallo señala: *“Desde el punto de vista de la teoría de la acción, se tiene que ella conduce una pretensión jurisdiccional en la que se anida un interés que se enraíza en una situación contenciosa que, en definitiva, se alza como su causa de pedir. Esto abre la interrogante relativa a si el fundamento inmediato del derecho deducido en juicio ha de ser, necesariamente, un diagnóstico inicial o si puede serlo uno intermedio o final. ¿Es legítimo para un trabajador que conoce su diagnóstico de enfermedad profesional con leve incapacidad, posponer o renunciar temporalmente al ejercicio de la acción indemnizatoria contra el empleador al que considera responsable del menoscabo? Como se advertirá, la respuesta negativa conlleva el inicio del cómputo del plazo de prescripción de la acción correspondiente, desde dicho noticiamiento. Los análisis que anteceden son ilustrativos en cuanto a la abierta posibilidad y previsibilidad de un resultado adverso de los empeños de sanación del padecimiento, lo que se sabrá en la medida que nuevos controles vayan mostrando su estancamiento, cuando no su progresión. Cada una de esas experiencias constituye un episodio, esto es, un momento en la realidad del sujeto que puede o no engendrar el interés jurídico de perseguir las compensaciones a las que podría llegar a parecerle tiene derecho. El fundamento inmediato del derecho deducido en juicio será, pues, el evento que precisa y determinadamente ha dado lugar a la activación del tribunal correspondiente. En otros términos, nada impide que el empleado que en determinado tiempo sabe le afecta una enfermedad calificada como profesional y que ello lo incapacita en un porcentaje que califica como menor, no traduzca esa limitación en un anhelo jurisdiccional, sea en la esperanza de obtener la mejoría en la que se propone empeñarse, sea en resguardo de una fuente laboral que teme perder como consecuencia de demandar de perjuicios a su patrón. En ese mismo dependiente, enterado, ahora, del progreso de su dolencia y consciente de la inhabilidad*



agravada que presentemente se le diagnostica, puede surgir el propósito reivindicador. La causa de pedir de la acción consiguiente no será, por cierto, lo otrora acontecido, sino el episodio contemporáneo en el que se enquistó la congoja de la desesperanza de una recuperación. En la perspectiva de la teoría de la acción, ninguna duda podría caber en punto a que, siendo la causa de pedir la de la grave deficiencia recién diagnosticada, a partir de ella nace la exigibilidad que en esta resolución procura determinarse. Si se quiere –de acuerdo con lo explicado en supra 7°- hay dos o más enfermedades. Una, la del diagnóstico inicial. Otra, la del terminal, cuando no la de algunos intermedios; a cada una su acción, con su propia exigibilidad.” (Fallo en causa rol N°2.661-2015, sobre unificación de jurisprudencia, Excma. Corte Suprema).

A mayor abundamiento, idéntico criterio jurídico ha manifestado esta Corte, mediante sentencias dictadas con fecha 18 de junio de 2019, en causa Ingreso Corte N°73-2019; con data 3 de julio de 2019, en recurso Ingreso Corte N° 70-2019, y con fecha 26 de agosto de 2019, en causa Ingreso Corte N° 80-2019.

VIGESIMO PRIMERO: Que con los razonamientos contenidos en los motivos anteriores, no es posible realizar el mismo análisis respecto de los dos trabajadores fallecidos, señores Oscar Orlando Godoy Rodríguez y Carlos Sebastián Urbina Canales, a la luz del artículo 79 de la Ley 16.744, al haber contabilizado el fallo el plazo de prescripción según la fecha de su fallecimiento indicados en los certificados de defunción, que además establecieron como causa de muerte la enfermedad profesional de silicosis.

En efecto, es un hecho asentado en el considerando noveno de la sentencia impugnada que: “En relación al señor Urbina, la última evaluación de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez data del 6 de septiembre de 2000 y, por su parte, sabemos que falleció el 30 de junio de 2018. Luego, en el caso del señor Godoy, tenemos que la última evaluación de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez data del 22 de marzo de 1989 y que falleció el 31 de agosto del año 2009”; sin embargo este razonamiento pugna con lo que se ha venido razonando por esta Corte, en cuanto computar el plazo de prescripción de quince años, en una fecha distinta a las ya señaladas, conforme a lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley 16744 y a la luz del criterio jurisprudencial establecido por nuestro máximo tribunal, en



cuanto a que dicho plazo debe iniciarse en su cómputo desde la última reevaluación médica de la enfermedad profesional de silicosis y no desde el fallecimiento del trabajador a causa de dicha enfermedad, razones que llevan a que la segunda causal de nulidad propuesta por el recurrente, será acogida parcialmente como se dirá en lo resolutivo del fallo.

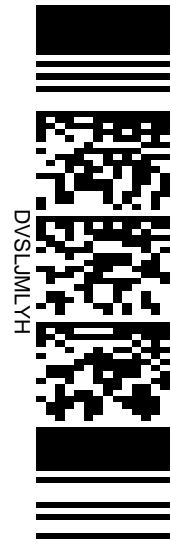
VIGESIMO SEGUNDO: Que, por lo expuesto, considerando en definitiva que se advierte yerro legal en la sentencia analizada en la correcta aplicación del artículo 79 de la ley 16.744, respecto de las acciones deducidas por los trabajadores Carlos Urbina Canales y Oscar Godoy Rodríguez, deberá acogerse parcialmente el segundo motivo invalidatorio, como se dirá en lo resolutivo del fallo.

VIGESIMO TERCERO: Que respecto del tercer capítulo de nulidad, planteado en forma subsidiaria, fundado en la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, en su arista de infracción de ley, en relación a los artículos 69 letra b) y 88 de la Ley N°16.744 y los artículos 1556 y 1558 del Código Civil, al declararse como transmisible el daño moral correspondiente a los señores Carlos Urbina Canales y Oscar Godoy Rodríguez, en el considerando décimo sexto del fallo y además, por otorgar indemnización por lucro cesante a los señores Mario Reinoso Cotaipi, Juan Galleguillos Pangué y Miguel Rivera Rivera en el considerando décimo quinto del fallo.

VIGESIMO CUARTO: Que el artículo 69 de la Ley 16.744 dispone: “Cuando, el accidente o enfermedad se deba a culpa o dolo de la entidad empleadora o de un tercero, sin perjuicio de las acciones criminales que procedan, deberán observarse las siguientes reglas: (...) b) La víctima y las demás personas a quienes el accidente o enfermedad cause daño podrán reclamar al empleador o terceros responsables del accidente, también las otras indemnizaciones a que tengan derecho, con arreglo a las prescripciones del derecho común, incluso el daño moral.”

Que el artículo 88 dispone: “Los derechos concedidos por la presente ley son personalísimos e irrenunciables.”

Que el recurrente plantea que el correcto entendimiento de dichas normas legales es que la acción para reclamar el daño moral propio, es decir, el que sufrió el trabajador con ocasión de la enfermedad profesional, no se transmite a los herederos de este, lo que se sustenta en el artículo 88 de la Ley N°16.744, que señala que los derechos que establece dicha ley,



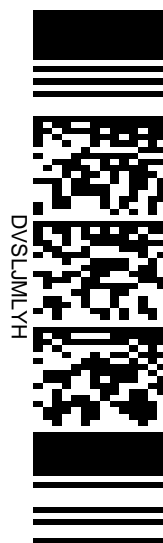
dentro de los que se encuentra el derecho a reclamar una indemnización por daño moral conforme el artículo 69 letra b) citado, son de carácter personalísimos, es decir, su titularidad únicamente corresponde al trabajador que sufrió la enfermedad y no a los herederos.

Agrega que los contratos de trabajo de los actores finalizaron por su propia voluntad, incluso antes de que se realizaran las últimas evaluaciones de incapacidad y el daño alegado por este concepto no resulta ser cierto.

En cuanto al lucro cesante, los trabajadores no se vieron privados de sus remuneraciones por el padecimiento de su enfermedad profesional, puesto que ellos mismos dejaron de prestar servicios para la demandada por su voluntad propia, pues la enfermedad profesional que sufrían no tuvo ningún impacto previsible en sus remuneraciones, desde el momento que ellos, de voluntad propia, dejaron de prestar servicios, lo que inexorablemente implicaba que dejaran de percibirlas.

VIGESIMO QUINTO: Que, al respecto, la Excma. Corte Suprema ha establecido la transmisibilidad de la acción indemnizatoria por daño moral, al señalar: *“...Y concluye que no habría infracción alguna al artículo 88 de la Ley nº 16.744. En relación a este precepto, debe considerarse que al referirse a los derechos que se confieren al trabajador se alude a aquellos de índole social, en particular las prestaciones médicas, por incapacidad, invalidez y por supervivencia, contempladas en el Título V, pero no alcanza a las acciones indemnizatorias previstas en el artículo 69. Lo contrario significaría que cualquiera sea la naturaleza del daño cuya indemnización se reclama, daño emergente o lucro cesante, no cabría la transmisibilidad, lo que atendido el artículo 2315 del Código Civil resulta impropio. No corresponde interpretar dicho precepto en el sentido que las acciones indemnizatorias serían personalísimas, limitándose el ámbito de aplicación a las prestaciones sociales de las cuales se ocupa la Ley 16.744.*

Asumiendo que los herederos son los continuadores de la persona del causante, de acuerdo al artículo 1097 y 951 del Código Civil, no existe discontinuidad en quien ejerce la acción ante los tribunales de justicia. Esta aproximación suele ser compartida cuando se trata de una víctima directa que ha sobrevivido al accidente, o en otros términos, en situaciones en que aquella no murió en forma instantánea, sino que transcurrido un tiempo entre la causa del accidente y la muerte. Así lo afirman en Chile, por ejemplo, el



profesor Corral, quien circunscribe el debate al caso “en que la muerte se produce inmediatamente como consecuencia del hecho dañoso, y no del evento de lesiones que producen la muerte a corto plazo, ya que en esta última situación parece claro que el derecho a la indemnización, incluidos los daños morales, ha ingresado al patrimonio del causante y es transmitido a su sucesión”. (Corral Talciani, Hernán, Lecciones de responsabilidad civil extracontractual, (2003), p. 320 y 321). El asunto se circunscribe a dirimir si la víctima padeció un daño moral que haya originado una acción que permita requerir la indemnización. Se trata de una cuestión de prueba a cargo de quien ejerce la acción, quien deberá acreditar el daño moral del causante y su calidad de heredero. La indemnización de ese daño moral requiere su prueba en la persona del difunto, lo que supone que éste fue titular de la acción para demandar la indemnización.

Los hechos asentados en esta causa acreditan que la víctima directa no falleció en forma instantánea o de manera coetánea al accidente, sino que transcurrió un lapso dado que su muerte sucedió tiempo después del contagio y durante el traslado a la ciudad de Santiago al haberse manifestado la enfermedad mientras se encontraba trabajando para la demandada en el sur de Chile. Debe, en consecuencia, tenerse por un hecho que la víctima sobrevivió al accidente o acto negligente, lo que importa el ingreso de la acción a su patrimonio, y habilitaría a transmitirla a sus herederos. La doctrina nacional está más bien de acuerdo en que aquí debiera aceptarse la transmisibilidad y los herederos estarían habilitados para reclamar la indemnización del causante. En esta posición encontramos a Alessandri, Domínguez Hidalgo y Corral (Domínguez Hidalgo, Carmen, El daño moral, Santiago, Jurídica, 2000, p. 741; Corral, op. cit., (2003), p. 320 y 321; Alessandri Rodríguez, Arturo, Tratado de responsabilidad extracontractual, Santiago, Nacimiento, 1943, p. 467). Asumiendo que el trabajador cuyos herederos reclaman el daño moral de causante sobrevivió al accidente, no hay inconvenientes dogmáticos que impidan aseverar la transmisión de la acción para reclamar la indemnización por el daño moral”. (CS Fallo Unificación causa Rol 33.990-2016 de fecha 27 diciembre 2016).

Además, ha agregado como criterio jurisprudencial: “Segundo: Que, conforme a lo ya razonado, la acción incoada por los demandantes es de índole contractual, mediante la cual se busca la indemnización del daño



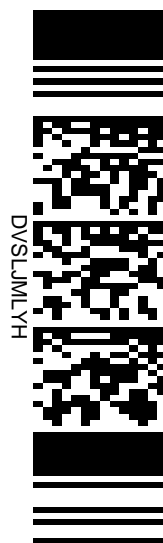
moral del causante, el cual es reclamado en calidad de herederos del trabajador fallecido. Atendido que conforme las reglas de sucesión, en particular los artículos 951 y 1097 del Código Civil, los herederos suceden al causante en todos sus derechos y obligaciones transmisibles, entre los cuales se encuentra comprendida la acción para reclamar la indemnización del daño moral padecido, por lo cual cabe concluir que la cónyuge e hijos que comparecen en autos están habilitados para requerir dicha indemnización. (Sentencia de reemplazo causa Rol 33.990-2016 de fecha 27 diciembre 2016).

VIGESIMO SEXTO: Luego, establecido que los trabajadores vivieron con el diagnóstico de silicosis, sufrieron un daño moral al ver su calidad y expectativa de vida disminuidas, potencialmente pudieron haber demandado ellos en vida a su ex empleador e ingresaron a su patrimonio, ese derecho a accionar en contra de la demandada, por lo que no es relevante que el daño sea individual o personalísimo si se quiere, pues el objeto de la transmisión no es el daño sino que la acción para reclamarlo. Aunque el daño sea personal, de eso no se deriva el carácter intransmisible de la acción indemnizatoria, pues el contenido de ésta, es de índole patrimonial y no hay una lesión al artículo 88 de la ley 16744, pues este precepto, al referirse a los derechos que se confieren al trabajador se alude a aquellos de índole social, en particular las prestaciones médicas, por incapacidad, invalidez y por supervivencia, contempladas en el Título V, pero no alcanza a las acciones indemnizatorias previstas en el artículo 69 de dicha ley, por lo que no se avizora infracción de ley, por lo que esta alegación será desestimada.

VIGESIMO SEPTIMO: Que además, se plantea otra alegación del recurrente contenida en esta tercera causal de nulidad contemplada en el artículo 477 del Código del Trabajo, señalando como normas infringidas los artículos 1556 y 1558 del Código Civil, al cuestionar la decisión del sentenciador, de otorgar indemnización por lucro cesante a los señores Mario Reinoso Cotaipi, Juan Galleguillos Pangue y Miguel Rivera Rivera.

En efecto refiere que la infracción se produce en el considerando décimo quinto del fallo impugnado, el que declara la existencia de los presupuestos para hacerla procedente.

VIGESIMO OCTAVO: Que, es del caso señalar que las sentencias se construyen estableciendo hechos sobre la base de la prueba rendida, la que



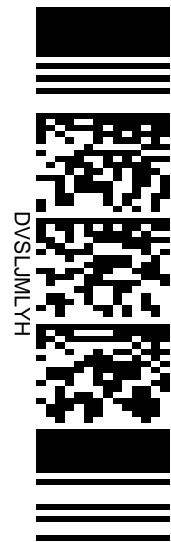
debe ser analizada por el tribunal de la instancia de acuerdo a las normas que le indican los parámetros de valoración. A los hechos así establecidos se debe aplicar la ley para de ese modo dictar la sentencia, y es justamente esa labor de aplicación de la ley la que puede ser revisada por esta Corte en un recurso de nulidad. La finalidad de revisar los hechos es ajena al recurso de nulidad, lo que obliga al recurrente al señalamiento en específico del yerro jurídico que constituye la causa de nulidad que invoca, en forma precisa y fundamentada.

VIGESIMO NOVENO: Que al respecto, el recurrente al desarrollar la causal que invoca, respecto de la infracción a los artículos 1556 y 1558 del Código Civil, por haberse otorgado una indemnización por lucro cesante a los actores que indica, se limita a señalar que no se cumplen los requisitos para otorgar el lucro cesante, al referir que el daño alegado por los actores no es cierto, ejemplificando con el contrato a plazo fijo, lo que puede entenderse como una ganancia futura y cierta de un determinado ingreso de origen laboral.

El recurrente no explica de qué manera se infringe los artículos 1556 y 1558 del Código Civil que denuncia transgredidos en su recurso, realiza una serie de cuestionamientos al fallo, más propios de un recurso de apelación, al analizar los hechos establecidos en la sentencia recurrida, aspecto en que esta Corte carece de competencia y no construye la causal de nulidad esbozada, indicando con determinación la forma en que dichas normas fueron infringidas por el sentenciador al establecer los hechos en el fallo y cuyos razonamientos errados en el derecho, justifican su anulación.

Al ser el recurso de nulidad de derecho estricto, en que sólo se revisan aspectos de derecho, no es posible revisar los hechos asentados en la causa, por lo que al no explicar adecuadamente de qué modo se construye la infracción de los preceptos legales que se denuncian infringidos, de cuál era el razonamiento jurídico correcto y de qué modo la errada e ilógica aplicación de tales preceptos el sentenciador, significó un yerro jurídico que le llevó a una conclusión contraria al derecho en el fallo impugnado, la causal aparece vacía de contenido, por lo que necesariamente esta causal, será desestimada por falta de fundamentación jurídica.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 477, 480, 481 y 482 del Código del Trabajo, se declara, que **SE**



ACOGÉ sin costas, el recurso de nulidad interpuesto por el abogado don Oscar Gonzalo Guajardo Cabello, en representación de Corporación Nacional del Cobre de Chile CODELCO-CHILE, División Salvador, en contra de la sentencia definitiva de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Titular del Juzgado de Letras y del Trabajo de Diego de Almagro, señor Rodrigo Matus de la Fuente, la que, por consiguiente, **es nula parcialmente, debiendo dictarse acto seguido y sin nueva vista, pero separadamente, la respectiva de reemplazo.**

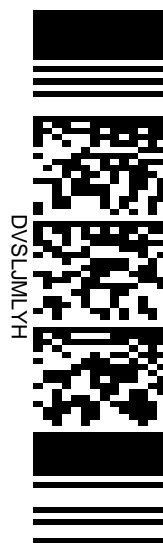
Redacción de la Abogada Integrante doña Verónica Ximena Álvarez Muñoz

Regístrese, comuníquese y archívese.

RUC N° 19-4-0234775-1

RIT O-31-2019

N°Laboral - Cobranza-136-2021.



SENTENCIA DE REEMPLAZO.

Copiapó, veintidós de diciembre de dos mil veintiuno.

En cumplimiento a lo decretado con esta misma fecha, se dicta la sentencia de reemplazo que sigue.

VISTOS:

Se reproduce la sentencia recurrida, con excepción de su fundamento Noveno, que se elimina.

Y TENIENDO EN SU LUGAR Y, ADEMÁS, PRESENTE:

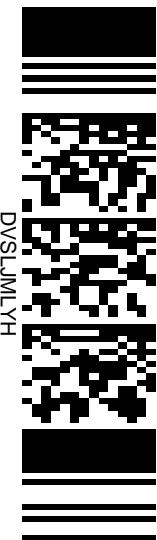
PRIMERO: Que el artículo 79 de la Ley 16.744, dispone, en lo pertinente: *“En el caso de la neumoconiosis el plazo de prescripción será de quince años, contado desde que fue diagnosticada”*.

SEGUNDO: Que habiéndose establecido que la prescripción de la acción indemnizatoria conforme los razonamientos contenidos en los motivos Décimo sexto, Décimo séptimo y Décimo octavo de este fallo, fundamentos que se tendrán por reproducidos en esta sentencia, es de quince años contados desde la fecha de la última reevaluación médica de la enfermedad profesional de silicosis realizada a cada uno de los actores, conforme el artículo 79 de la Ley 16.744, es posible establecer en forma cierta para cada uno de los casos, el inicio del cómputo del referido plazo de prescripción.

TERCERO: Que son hechos establecidos en la causa que el señor Carlos Urbina Canales, tuvo su última evaluación de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez el 6 de septiembre de 2000 y el señor Oscar Orlando Godoy, tuvo su última evaluación de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez el 22 de marzo de 1989.

CUARTO: Que, además se estableció como hecho de la causa, que el señor Mario Reinoso Cotaipi tuvo su última evaluación por la Compin el 26 de mayo de 2011; en el caso del señor Juan Galleguillos Pangue lo fue el 19 de mayo de 2016 y el señor Miguel Rivera Rivera fue el 14 de septiembre de 2016.

QUINTO: Que así las cosas, las acciones interpuestas por los señores Oscar Orlando Godoy y de don Carlos Urbina Canales, lo fueron una vez que había transcurrido con creces, el plazo de quince años contemplado en el citado artículo 79 de la Ley 16.744.



Por estas consideraciones, visto lo dispuesto en los artículos 1,2, 7, 8, 9, 73, 172, y siguientes del Código del Trabajo, artículos 69 y siguientes de ley 16744 se declara que:

Se mantienen todas las decisiones del fallo de la instancia de fecha 24 de septiembre de dos mil veintiuno, con la salvedad de su numeral II y de las letras d) y e) de su numeral IV, que se eliminan y en su lugar, se resuelve:

II. Respecto de las excepciones de prescripción deducidas por la demandada:

a) Que se rechazan las excepciones de prescripción que han sido deducidas por la demandada respecto de don Mario Reinoso Cotaipi, de don Juan Galleguillos Pangue y de don Miguel Rivera Rivera.

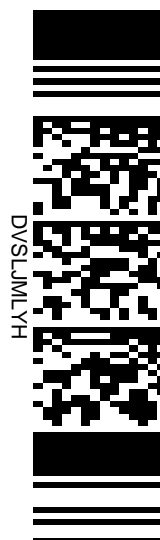
b) Que se acoge las excepciones de prescripción deducida por la demandada respecto de don Oscar Orlando Godoy y de don Carlos Urbina Canales, por lo que, en consecuencia, se rechaza la acción indemnizatoria de ambos actores.

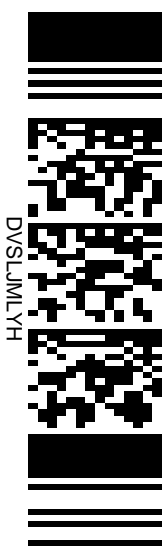
Regístrese, notifíquese y dese copia.

Redactó la Abogada integrante doña Verónica Ximena Álvarez Muñoz.

N°Laboral - Cobranza-136-2021.

En Copiapó, veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.





DVSLJMLYH

Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Copiapó integrada por Ministro Presidente Marcela Paz Ruth Araya N., Fiscal Judicial Maria Jose Hernandez S. y Abogada Integrante Veronica Alvarez M. Copiapo, veintidós de diciembre de dos mil veintiuno.

En Copiapo, a veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

